

HONORABLE JUEZ

**JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI**

E. S. D.

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA.**

**REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA.**

**RADICACIÓN: 76001-33-33-008-2022-00010-00**

**ACCIONANTE: ANDERSON RÍOS GONZÁLEZ Y OTROS**

**ACCIONADO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.**

**LINA MARÍA ARBOLEDA GÓMEZ**, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con cedula de ciudadanía 1.130.592.302, Abogada titulada y en ejercicio de la profesión, portadora de la Tarjeta Profesional número 191823 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderada del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme al poder adjunto al proceso, de manera atenta descorro el traslado para contestar la Demanda que en ejercicio del medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA** ha sido incoada en esta jurisdicción pretendiendo se declare responsabilidad patrimonial en contra del Ente territorial Distrito Especial de Santiago de Cali, en virtud de los hechos ocurridos día 01 de diciembre de 2019, cuando, según se narra en la demanda, el Señor ANDERSON RÍOS GONZÁLEZ Y OTROS, iba cruzando el puente peatonal de la Carrera 28 con Calle 72 Y del Barrio Poblado II de la ciudad de Santiago de Cali -Valle, y la estructura colapsó, causaándole lesiones al caer a una altura aproximada de 3 metros directamente a un canal de aguas residuales, de la ciudad de Cali – Valle, en los siguientes términos:

### **LO QUE SE DEMANDA**

Demandan los actores a través de apoderado, al Distrito Especial de Santiago de Cali, POR FALTA O FALLA DEL SERVICIO, por omisión en el cumplimiento del deber legal de hacer mantenimiento preventivo, reparaciones y construcciones, afirmando que es Administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales alegados por el Señor ANDERSON RÍOS GONZÁLEZ y su núcleo familiar, como consecuencia de los hechos que indica ocurrieron día 01 de diciembre de 2019.

### **FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS:**

El Distrito Especial de Santiago de Cali no es responsable de los perjuicios alegados por el Señor ANDERSON RÍOS GONZÁLEZ, como consecuencia del aparente accidente sufrido el día 01 de diciembre de 2019, cuando dice que iba cruzando el puente peatonal

de la Carrera 28E1 con Calle 72 Y del barrio Poblado II de la ciudad de Santiago de Cali - Valle, cuando la estructura colapsó.

Como se puede observar los hechos de la demanda son confusos en su descripción del lugar del suceso y la demanda carece de material probatorio que confirme y de veracidad sobre los hechos planteados; no existe prueba que determine y de fe de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del supuesto accidente en el puente peatonal. Se logrará evidenciar en el transcurso del proceso que no existen pruebas que confirmen y demuestren que las lesiones presentadas por el Señor ANDERSON RIOS GONZÁLEZ, ocurrieron como consecuencia de la responsabilidad antijurídica el Distrito Especial de Santiago de Cali.

Por tal razón, me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, porque como quedará demostrado en el transcurso del proceso, no existe relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre el hecho y el daño que sea imputable el Distrito Especial de Santiago de Cali.

Conforme a lo dicho, las pretensiones que enmarca en su demanda la parte actora son infundadas, no se le puede imponer esa responsabilidad al Municipio de Santiago de Cali, teniendo como base situaciones que no gozan de un soporte probatorio. Reclamaciones en torno al lucro cesante, daños morales, no son del resorte de la Administración Municipal, no existe certeza respecto a los hechos que dieron origen a las lesiones de el Señor ANDERSON RIOS GONZÁLEZ, mucho menos las hay respecto a la participación o responsabilidad el Distrito Especial de Santiago de Cali, en el hecho generador de las mismas.

Las pretensiones solicitadas por la parte demandante, además de ser infundadas y de no poder imponérselas al el Distrito Especial de Santiago de Cali, se exceden y no gozan de soportes que les den viabilidad, por ejemplo las que cita a título de perjuicios morales, adolecen de los presupuestos dados por la Sala de lo Contencioso Administrativo en este tema, donde se determina el monto indemnizatorio en salarios mínimos asignando un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que estas se hallen respecto del lesionado, conforme a la gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles, se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso. Llevado al caso que nos ocupa, la parte demandante fija y tasa los perjuicios sin seguir o hacer esta diferenciación, asigna a cada uno el mismo monto sin tener en cuenta el grado o relación de parentesco con el lesionado. También se asigna o se tasa el porcentaje de estos valores sin tener en cuenta el grado de complejidad o gravedad de las lesiones, al respecto como se puede colegir en el proceso, no se cuenta con esa valoración por parte de la Junta de Calificación de Invalidez Regional del Valle del Cauca.

No obstante, si bien la Sala fijó tales parámetros, lo cierto es que la aplicación de los mismos, depende en gran medida de las pruebas con las cuales cuente el proceso respecto de las lesiones y las circunstancias en que se produjeron y como se observara el recaudo probatorio no da certeza ni siquiera del accidente de tránsito.

Volviendo a lo plasmado en la demanda, el Señor ANDERSON RIOS GONZÁLEZ, tasa en sus pretensiones perjuicios morales en la demanda, en calidad de afectado directo, de igual manera solicita perjuicios morales para quienes integran según su escrito su círculo afectivo, advirtiendo que la tasación que realiza desborda por completo los valores y parámetros establecidos por la ley en estos casos.

A modo de clarificar y dar cuenta que esas pretensiones además de infundadas, desbordan los parámetros que deben seguir en el evento de configurarse una responsabilidad directa y única, a continuación se relaciona el cuadro que la legislación colombiana viene teniendo en cuenta para estos casos.

| REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| GRAVEDAD DE LA LESIÓN                         | NIVEL 1  | NIVEL 2   | NIVEL 3  | NIVEL 4   | NIVEL 5  |
|   | Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales | Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos) | Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil | Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil. | Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados |
|   | S.M.L.M.V.   | S.M.L.M.V.  | S.M.L.M.V.   | S.M.L.M.V.  | S.M.L.M.V.   |
| Igual o superior al 50%                       | 100  | 50  | 35   | 25  | 15   |
| Igual o superior al 40% e inferior al 50%     | 80   | 40  | 28   | 20  | 12   |
| Igual o superior al 30% e inferior al 40%     | 60   | 30  | 21   | 15  | 9  |
| Igual o superior al 20% e inferior al 30%     | 40   | 20  | 14   | 10  | 6  |
| Igual o superior al 10% e inferior al 20%     | 20   | 10  | 7  | 5   | 3  |
| Igual o superior al 1% e inferior al 10%      | 10   | 5   | 3,5  | 2,5   | 1,5  |

### FRENTE A LOS HECHOS U OMISIONES DE LA DEMANDA:

AL HECHO UNO: Es cierto, conforme al documento allegado con la demanda.

AL HECHO DOS: Es cierto, conforme al documento allegado con la demanda, pero son situaciones por acreditar por parte del demandante ante el Despacho en el momento procesal oportuno.

AL HECHO DOS: No me consta que a ese día y a esa hora se dirigiera para donde indica; no hay soportes del presunto accidente, no existe una descripción respecto al auxilio por las personas que presenciaron el suceso. Tal como se mencionó anteriormente, no existe por parte de la autoridad competente informe de ninguna entidad que indique la ocurrencia de tales situaciones; estas aseveraciones y situaciones son situaciones y circunstancias que tendrá que demostrar la demandante y valorar el Despacho en su debido momento.

AL HECHO TERCERO: No es un hecho como tal, entendiendo además que hace parte de una manifestación que en su momento el Despacho tendrá que valorar; es de aclarar al despacho que dentro de la acción popular se encontró acreditado que el puente ubicado en la carrera 28D5 #72-52 se encontraba en buenas condiciones de movilidad para los peatones, y que solo requería para dicha fecha de un mantenimiento general de limpieza, pintura, alinear elementos estructurales doblados, y de la losa de circulación peatonal, que las vigas y estribos están en buenas condiciones.

AL HECHO CUARTO: No me consta, tales aseveraciones tendrán que ser acreditadas y demostradas por parte del actor, más aún cuando no existe prueba de autoridad competente que registre la ocurrencia de tal hecho y que como ya se ha reiterado.

AL HECHO QUINTO: No es cierto, conforme a lo que reposa en el expediente, no existe prueba alguna que certifique la ocurrencia de los hechos narrados por los demandantes, donde solo se evidencia en los documentos aportados una contestación a solicitud de por parte del BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS por el comandante ROBERTO DUQUE MORA, informe de Fecha 30 de agosto del 2021 con radicado CEXCO-192-2021, que fue atendido una llamada de emergencia del 12 de enero del 2019, el cual es incopnsistente con la fecha de los hechos son 01 de diciembre de 2019, los cuales refiere la demanada en lo ocurrido en la carrera 28E 1 CALLE 72 Y Barrio el Poblado, NO ATENDIERON al señor ANDERSON RIOS GONZALEZ ni al señor JUAN DANIEL AMBUILA CARRERÑO, Denotando así inconsistencias en la fecha de los hechos y en la certeza del hecho en referente dejando por esclarecer la existencia del accidente.

AL HECHO SEXTO: No me consta, son situaciones por acreditar, respecto a los datos consignados de la consulta, harían parte del relato entregado por el paciente, son situaciones por corroborar y demostrar ante el Despacho.

AL HECHO SÉPTIMO: No me consta, son situaciones por corroborar y demostrar ante el Despacho.

AL HECHO OCTAVO: No me consta, son situaciones por acreditar, respecto a los datos consignados de la remisión ante el especialista, son situaciones por corroborar y demostrar ante el Despacho.

AL HECHO NOVENO: Es cierto, fue contestada mediante oficio de fecha 18 de diciembre del 2021 bajo radicado 2021451030002218.

AL HECHO DECIMO: Es cierto, conforme al documento allegado con la demanda.

### **FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO**

En la demanda se plantean argumentos encaminados a endilgarle responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali, respecto del supuesto accidente ocurrido el día 01 de diciembre de 2019 en el puente peatonal ubicado en el barrio El Poblado II, señalándose en el libelo que el mismo colapsó derrumbándose por completo, ocasionándole lesiones a el Señor ANDERSON RIOS GONZÁLEZ Y OTROS .

Sobre los hechos narrados no existe prueba alguna que dé soporte de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no existe prueba que indique y que acredite las causas, del supuesto accidente.

De estos hechos, conforme a lo que reposa en el expediente, no existe informe, ni reporte alguno de autoridad competente, del presunto accidente en el puente peatonal, no se encontró ninguna documentación relacionada con el accidente que obedezca a lo narrado en la demanda.

De lo anterior se puede concluir que no existe un informe o registro que certifique la ocurrencia de los hechos narrados por el demandante, lo descrito solo tiene sustento en las aseveraciones que la misma demandante realizó ante el personal que atendió las lesiones cuyo origen es desconocido para la Administración Distrital de Santiago de Cali.

Las acotaciones realizadas por el personal médico, dan cuenta de la asistencia recibida por el Señor ANDERSON RIOS GONZÁLEZ Y OTROS; estas expresiones pueden dar fe de las lesiones presentadas en el cuerpo de la demandante sin que se pueda colegir o afirmar que estas sean producto de una falla estructural del puente peatonal. Todo se desprende de lo aseverado por la víctima sin que medie información de una autoridad u otro medio probatorio que constate la ocurrencia del hecho, dando claridad sobre tiempo, modo y lugar del mismo, que evaluara los motivos del supuesto accidente, por lo cual las

lesiones presentadas por el Señor ANDERSON RIOS GONZÁLEZ Y OTROS no se pueden atribuir a una responsabilidad del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

No existe certeza o evidencia que dé cuenta del lugar exacto donde ocurrió el accidente mencionado por el demandante; la parte actora se limita a señalar una responsabilidad al el Distrito Especial de Santiago de Cali y que como consecuencia de ella se le condene a pagar unas sumas de dinero por perjuicios materiales, daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales, sin que se prueben las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon al mismo. En este orden de ideas, carece de sustento lo afirmado por el apoderado de la parte demandante en cuanto señala que el hecho implica una falla del servicio por parte de la Administración, lo cual le corresponde probar.

No hay evidencia del accidente, no hay certeza del lugar donde supuestamente ocurrió, la descripción que se da del sitio es incongruente, al no contar con estos presupuestos, se imposibilita observar el comportamiento de quien realiza la acción, no sabemos si efectivamente transitaba por el puente peatonal, si este correspondía al descrito en la demanda, al desconocer estos hechos no podemos tener claridad frente a si ella se encontraba pasando el puente peatonal en el momento que presuntamente se desplomó, no sabemos si efectivamente el Señor ANDERSON RIOS GONZÁLEZ Y OTROS se encontraba en el lugar de los hechos.

Observada la relación de hechos y pretensiones entregada por la parte actora, existe plenamente una ausencia de material probatorio que involucre o determine de manera contundente una responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali en las lesiones presentadas por el Señor ANDERSON RIOS GONZÁLEZ Y OTROS .

El apoderado de los actores plantea hechos frente a los cuales no existe prueba alguna que dé soporte de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; no existe prueba que indique y que acredite las causas del supuesto accidente. Manifiesta que la víctima fue trasladada en ambulancia a la clínica Colombia en la ciudad de Cali, donde la valoraron y posteriormente trasladada a la clínica Colombia de Cali, donde siguieron con el tratamiento y la atención por el presunto accidente que sufrió.

Solo se evidencia en los documentos aportados con la demanda, una contestación a solicitud de por parte del BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS por el comandante ROBERTO DUQUE MORA, informe de fecha 30 de agosto del 2021 con radicado CEXCO-192-2021, en el que se indica que fue atendido una llamada de emergencia del 12 de enero del 2019, ocurrido en la carrera 28E 1 CALLE 72Y Barrio el Poblado, NO ATENDIERON a el Señor ANDERSON RIOS GONZÁLEZ Y OTROS ni el señor Juan Daniel Ambuila Carreño, denotando así inconsistencias en la fecha de los

hechos y en la certeza del hecho en referente dejando por esclarecer la existencia del accidente.

Respecto a la Responsabilidad administrativa del Estado por daños causados a particulares, la Jurisprudencia tradicionalmente adoptada exige la presencia de tres (3) Elementos esenciales a saber: Un daño causado a un bien jurídicamente tutelado; b) Una falla en el servicio por acción u omisión, retardo o irregularidad en su prestación; y c) El nexo causal entre uno y otro extremo. Es decir, una relación de causalidad entre la falta o falla de la Administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización.

La esencialidad de esos tres (3) elementos llega al extremo de que faltando uno de ellos no se configura la responsabilidad administrativa. En nuestro sistema, corresponde al interesado en la indemnización, probar la falla del servicio, la existencia del daño con todas las características que lo hacen indemnizable y la relación de causalidad.

El presente caso debe examinarse bajo el régimen de la falla probada, en la cual a la demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal, y ya que se imputa una omisión administrativa, corresponde a la parte actora probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el cumplimiento de un deber y demostrar que dicha falla fue la única causante del daño.

Dentro de los hechos y situaciones esgrimidas no se logra acreditar la responsabilidad de la Administración Municipal que represento. La Subsecretaria de Mantenimiento Vial, adscrita a la Secretaría de Infraestructura, en atención a la solicitud realizada por la parte demandante mediante derecho de petición con radicado No 202141730102780972, dio respuesta mediante el radicado de salida No 202141510200033204, del 3 de diciembre del 2021, así:

- 1) ¿Cuál era el estado en el que se encontraba el puente peatonal referenciado para la fecha de los hechos? Respuesta: De acuerdo a los informes ejecutados por los profesionales encargados de la comuna 13 en ese periodo, el puente peatonal se encontraba en buen estado para el servicio que debía prestar y para el que fue diseñado como es el paso de peatones, se evidenciaba que presentaba desgaste por mal uso de la estructura (deterioro progresivo).
- 2) ¿Causas del colapso del puente, si son conocidas? Respuesta: La posible causa del colapso de puentes peatonales es el mal uso que la comunidad le da a los mismos, debido a que en repetidas ocasiones los usuarios los someten a cargas para las cuales no fueron diseñados, estos se diseñan para el paso de peatones, pero como se evidencia en casi todos los puentes peatonales de la ciudad de Santiago de Cali la comunidad los utiliza para paso de motos con dos pasajeros, se puede concluir que se presentó debilidad de la estructura metálica y desgaste por la pérdida progresiva de material de la superficie, causada por el movimiento que generaba el paso de las motocicletas con pasajeros por el puente peatonal.

- 3) ¿Cuál fue el mantenimiento o mantenimientos vial(es) que se le han realizado al mismo, con antelación al suceso descrito? Respuesta: La Secretaría de Infraestructura cuenta con el reporte del inventario y diagnóstico visual del puente peatonal realizado en el mes de agosto de 2015 por la Universidad del Valle, y en el cual se evidencia que el estado del puente peatonal estaba en buenas condiciones de su parte funcional y estructural.
- 4) ¿Citar las asignaciones o partidas presupuestarias para el mantenimiento de este puente para la fecha de los hechos o anteriormente? Respuesta: La Secretaría de Infraestructura cuenta con personal directo, que hace parte del Grupo Operativo y con el cual se desarrollan las actividades de reparación y mantenimiento de puentes tanto vehiculares como peatonales y que presentan deterioro en su parte funcional, de esta manera se realiza una de las partes de la asignación presupuestal para el capítulo de mantenimiento de puentes.

Acerca de la necesidad de probar la falla del servicio, dentro del régimen del Artículo 90 de la Constitución Nacional, el Consejo de Estado, en reiterada Jurisprudencia, se ha referido a la necesidad de probar la falla del servicio por parte de la Administración. Es así, como en Sentencia de Octubre 6 de 1.995, Consejero Ponente, Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 9535, dijo:

*“Comienza por señalar la Sala que el régimen de la responsabilidad presunta derivada del ejercicio de una actividad peligrosa por parte de la administración (Conducción de vehículos), en el cual solamente se requiere demostrar el daño y la relación causa, pudiendo la entidad demandada exonerarse sólo si demuestra la existencia de fuerza mayor o culpa de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero, no es aplicable al caso sub-judice., perjuicio de una actividad estatal, en sí misma peligrosa desarrollada para provecho suyo y de la colectividad.*

*Aquí la responsabilidad que pretende imputarse a la administración no se deriva del ejercicio de una actividad desarrollada mediante un nexo instrumental peligroso. Todo lo contrario: ella se deriva (sic) una omisión de la administración.*

*Por lo anterior, los hechos objeto del proceso deben manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o probada, en el cual al demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal.*

*Y, toda vez que se imputa una omisión administrativa, la parte actora debe, además de probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acreditar la existencia de la obligación legal o reglamentaria que imponía a la administración la realización de la conducta con la cual los perjuicios no se habrían producido. O, lo que es lo mismo, debía acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el incumplimiento de un deber y demostrar que dicha falta fue la causante del daño”.*

Y, en Sentencia del 5 de Agosto de 1.994, Proceso No. 8487, con ponencia del Consejero Carlos Betancur Jaramillo, se dijo:

*“1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa la responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta*

*de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la anti juridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO.*

*La noción de la falla del servicio no desaparece, como lo ha señalado la Sala, de la responsabilidad estatal fundada en el citado artículo 90 de la Carta, cuando de ella se derive la responsabilidad que se imputa a la administración se constituye en un elemento que debe ser acreditado por el demandante. Así lo ha repetido esta misma Sala.*

*En otros términos, el daño es antijurídico no solo cuando la administración que lo causa actúa irregularmente, sino cuando esta conducta lesiva esté ajustada al ordenamiento.*

*En otras palabras, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (la falla del servicio en el lenguaje corriente) tendrá que probarse esa irregularidad, salvedad hecha de los eventos en que esa falla se presume.*

*En ambas hipótesis ese primer presupuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las reglas de carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño se produjo sin falla o falta de la administración pero el que lo sufre no tenía por qué soportarlo, el acreedor, como es apenas lógico, deberá demostrar el daño y por qué pese a ser legal la actuación de la administración, no tenía por qué sufrirlo.*

*En síntesis, la nueva constitución, a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva no borró del ordenamiento la responsabilidad por falla del servicio. Las nociones de imputabilidad y de daño antijurídico así lo dan a entender” (Sentencia del 25 de febrero de 1.993, ponente, Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 7742)”.*

En tal sentido, para que en estos casos pueda afirmarse que se presenta la falla del servicio, resulta necesario determinar el alcance de la obligación estatal que se denuncia como incumplida o como cumplida defectuosamente, debiendo orientarse esta determinación hacia la noción relativa de este concepto elaborada por la doctrina y adoptada por la jurisprudencia.

Tal concepto implica, como lo ha dicho repetidamente el H. Consejo de Estado, que la responsabilidad de la Administración no puede resultar comprometida cada vez que un particular resulta lesionado en su “*vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades*”, para cuya protección están establecidas las autoridades de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución, pues el examen del cumplimiento adecuado de las obligaciones del Estado no puede hacerse con relación a la que se impone tal obligación, teniendo en cuenta sus recursos, sus capacidades y sus posibilidades y sin que pueda olvidarse que nadie, tampoco el Estado, puede ser obligado a lo imposible.

La noción de la falla del servicio tiene un carácter relativo, pudiendo el mismo hecho, según las circunstancias, ser reputado como culposo o como no culposo, en este sentido se pronunció el Consejo de Estado en Sentencia del 11 de Octubre de 1.990, Exp. 5737, donde expresó:

*“La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el carácter de relativo que presenta la falla del servicio y ha señalado que para hablar de ella hay que tener en cuenta la realidad misma, el desarrollo, la amplitud y la cobertura de los servicios públicos y que ella no puede tener, la misma extensión en un país desarrollado que uno como el nuestro que apenas está en vía de desarrollo.*

*Es cierto que en los términos del Artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes que a partir de ese texto que fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada que la determinación es afectada en tales bienes, pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación a que circunstancias de tiempo, modo y lugar, como si hubieran sucedido los hechos así como a los recursos con que contaba la Administración para prestar el servicio para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”.*

Sobre el mismo tema, en ponencia del mismo Consejero, doctor Carlos Betancur Jaramillo, expediente 10327, dijo: *“Por la actividad peligrosa ejercitada tanto por la administración como por los particulares, debe acudirse a la falla probada del servicio según la cual quien debe sacar adelante sus pretensiones está en la obligación de demostrar que el demandado fue el causante del daño”*

De lo anteriormente expuesto se colige que, no se podrá condenar a la entidad pública que represento, al pago de los perjuicios materiales y morales, ya que como se demostrará no hubo participación de sus servidores ni mucho menos falla del servicio, razón por la cual muy respetuosamente solicito no acceder a las pretensiones de la parte demandante.

Es decir, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (falla del servicio) tendrá que probarse esa irregularidad. En ambas hipótesis este primer presupuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las reglas de la carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño produjo una falta o falla de la administración pero que el que lo sufre no tenía por qué soportarlo pese a que sea legal la actuación de la administración no tenía por qué sufrirlo.

Se colige de lo expuesto que definitivamente no es el Distrito Especial de Santiago de Cali el llamado a responder por perjuicio alguno que logre demostrar el actor dentro de este proceso.

Frente a la cuantía, es preciso tener en cuenta que el patrimonio afectado con el hecho dañoso debe recibir como indemnización el monto de su disminución y no un valor exagerado que proviene de la voluntad ilimitada de los actores en la que no existe un razonamiento adecuado de su material probatorio.

En últimas, ni los perjuicios materiales ni los morales alegados tienen fundamento probatorio para lograr su resarcimiento por parte El Distrito Especial de Santiago de Cali.

Para adoptar cualquier decisión en este caso con fundamento en las pruebas aportadas al proceso, es indispensable que el operador jurídico se encuentre convencido por ellas, es decir, que se encuentren en estado de certeza sobre los hechos que declaran. Si las pruebas no alcanzan a producir esa convicción, porque no existen o porque pesa en su espíritu por igual en favor y en contra, o más en favor de una conclusión, pero sin despejar completamente la duda razonable, no podrán apoyarse en aquellas para resolver.

La parte actora se limita a señalar una responsabilidad al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI y que como consecuencia de ella se le condene a pagar unas sumas de dinero por perjuicios materiales, daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales, sin que se prueben las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon al mismo. Las fotografías aportadas no reúnen las exigencias que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido para otorgarles mérito probatorio. En este orden de ideas, carece de sustento lo afirmado por el apoderado de la parte convocante en cuanto señala que el hecho implica una falla del servicio por parte de la administración, lo cual le corresponde probar.

De las fotografías allegadas no se puede determinar en qué momento fueron tomadas, no prueban o llevan arraigo a los hechos, no hay una conexión con los mismos. Sobre el particular traigo a colación lo que la Corte Constitucional ha dicho sobre la fotografía como medio probatorio, Sentencia T-930A/13

**VALOR PROBATORIO DE LAS FOTOGRAFÍAS**-Juez está en la obligación de valorar dentro del conjunto probatorio, siguiendo las reglas de la sana crítica/**PRUEBA DOCUMENTAL**-Valor probatorio de las fotografías

*La fotografía es un medio probatorio documental de carácter representativo, que muestra un hecho distinto a él mismo, el cual emerge del documento sin que tenga que hacerse un ejercicio de interpretación exhaustiva de su contenido. Esto significa que “la representación debe ser inmediata, pues si a simple vista la fotografía muestra una variedad de hechos posibles, ‘ella formará parte de la prueba indiciaria, ya que está contenida en la mente de aquél (el intérprete), y no en el objeto que la documenta’”, advirtiéndose en esta misma sentencia T-269 de 2012 que “el Juez debe valerse de otros medios probatorios, apreciando razonablemente el conjunto”, tal como dispone la preceptiva*

*procesal penal. Al igual que otro documento y que el dictamen pericial, la fotografía es un medio que el juez está en la obligación de valorar dentro del conjunto probatorio, siguiendo las reglas de la sana crítica. Por ser un documento, se determinará si es privado o tiene las connotaciones para ser asumido como público y se verificará su autenticidad y genuinidad, conforme a la preceptiva correspondiente. El valor probatorio de las fotografías no depende únicamente de su autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la imagen representa la realidad de los hechos que se deducen o atribuyen, y no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el cambio de posición, lo que, como se indicó, obliga al juzgador a valerse de otros medios probatorios y a apreciar razonadamente el conjunto.*

*Las fotografías por sí solas no acreditan que la imagen capturada corresponda a los hechos que pretenden probarse a través de ellas y que debe tenerse certeza de la fecha y lugar en que se tomó la imagen, correspondiéndole al juez efectuar su cotejo con testimonios, documentos u otros medios probatorios. El Consejo de Estado ha sostenido<sup>1</sup>:*

*“Las fotografías o películas de personas, cosas, predios, etc., sirven para probar el estado de hecho que existía en el momento de ser tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez; pero como es posible preparar el hecho fotográfico o filmado, es indispensable establecer su autenticidad mediante la confesión de la parte contraria o de testigos presentes en aquel instante o que hayan formado parte de la escena captada o intervenido en el desarrollo posterior del negativo o por el examen del negativo por peritos o por un conjunto fehaciente de indicios; cumplido este requisito, como documentos privados auténticos, pueden llegar a constituir plena prueba de hechos que no requieran por ley un medio diferente; si falta, tendrá un valor relativo libremente valorable por el juez, según la credibilidad que le merezcan y de acuerdo con su contenido, las circunstancias que pudieron ser obtenidas y sus relaciones con las demás pruebas... También son un valioso auxiliar de la prueba testimonial, cuando el testigo reconoce en la fotografía a la persona de la cual habla o el lugar o la cosa que dice haber conocido; en estos casos, el testimonio adquiere mayor verosimilitud. Los Códigos de Procedimiento Civil y Penal colombianos lo autorizan.”*

En el caso concreto podemos concluir que existen unas las lesiones físicas, pero no son atribuibles al demandado Distrito de Santiago de Cali, ya que no existe certeza frente a la ocurrencia del accidente; sobre este hecho no existen soportes, no hay informes, ni registros por parte de la autoridad competente que den cuenta sobre los hechos narrados por la parte actora.

En este orden de ideas, carece de sustento lo afirmado por la parte demandante en cuanto señala que el hecho implica una falla del servicio por parte de la administración, lo cual le corresponde probar. Sobre este particular, considero pertinente hacer referencia a los planteamientos esbozados por el tratadista JUAN CARLOS HENAO, en su libro EL DAÑO, Universidad Externado de Colombia, primera edición, julio de 1.998, pagina. 38, cuando afirma:

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Subsección A; sentencia de marzo 10 de 2011. M. P. Mauricio Fajardo Gómez. Cfr. también sentencias de la Sección Primera de dicha coproración, proferidas en agosto 30 de 2007 y marzo 25 de 2010, con ponencia del Consejero Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.

*“Sin embargo, en ocasiones a pesar de existir daño no procede declarar la responsabilidad. Esto por cuanto el daño es requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad. En efecto, en algunos eventos no se declara la responsabilidad, a pesar de haber existido daño.*

*Es lo que ocurre en dos hipótesis: el daño existe pero no se puede atribuir al demandado, como cuando aparece demostrada una de las causales exonerativas; o el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre”.*

Por eso valga repetirlo, se considera que el daño es un elemento indispensable para la existencia de la responsabilidad, pero cuya sola presencia no convierte, de suyo, a quien lo sufre en acreedor de una indemnización.

#### CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA

Una de las causas ajenas que se acepta como fenómeno liberador de la responsabilidad por ruptura del nexo causal es el hecho de la víctima cuando es determinante e influye en el resultado, y por ello tiene implicaciones en el campo indemnizatorio. Su participación puede influir en el resultado, en proporción a su causalidad.

El Consejo de Estado ha utilizado en varias ocasiones la teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño; la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada aplicando tal teoría, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño<sup>2</sup>.

En el hipotético evento de encontrarse acreditada una falla del servicio, es necesario entonces que se analice en el curso del proceso si existió una causa idónea de la entidad pública o por el contrario hubo concurrencia de causa con un tercero o con el actor o fue culpa exclusiva de éste, lo que rompería el nexo causal

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, sent. de octubre 18 de 2000, Exp. 11981, C.P. Alier Hernández.

### **PRUEBAS:**

Solicito se tengan como pruebas las presentadas y pedidas por la parte actora, con la posibilidad de ser controvertidas en el transcurso del proceso.

Se solicita llamar a rendir declaración dentro del proceso, como testigo técnico, a la Ingeniera Civil Luz Edith Córdoba, Profesional Universitario perteneciente a la planta de cargos de la Secretaría de Infraestructura Distrital de Santiago de Cali, con el fin de que ilustre al Despacho respecto de las condiciones técnicas del puente y su estado para la fecha de ocurrencia de los presuntos hechos que se narran en la demanda. La testigo puede ser citada a través de la suscrita apoderada, para comparecer de manera presencial o virtual a la respectiva Audiencia de Pruebas.

### **FACULTAD PARA CONTRAINTERROGAR:**

Solicito me sea autorizado contrainterrogar a los testigos de la parte demandante en las audiencias respectivas, para la recepción de testimonios que sean decretados por su Despacho.

### **LLAMAMIENTO EN GARANTIA:**

En escrito separado, con el fin de que se hagan parte en el presente proceso, me permito formular Llamamiento en Garantía a la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, y como coaseguradoras a CHUBB SEGUROS COLOMBIA, SBS SEGUROS S.A. y HDI SEGUROS, según la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 420 – 80 - 994000000109.

### **ANEXOS:**

Los siguientes documentos:

1. Poder a mi conferido por la Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del Distrito de Santiago de Cali.
2. Copia del Acta de Posesión y Decreto de nombramiento de la aludida funcionaria.
3. Escrito del Llamamiento en Garantía a las Compañías ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CHUBB SEGUROS COLOMBIA, SBS SEGUROS S.A. y HDI SEGUROS y sus anexos.

4. Copia de certificado de existencia y representación de las compañías antes citadas, donde se identifica en cada una su domicilio y correo electrónico para efectos de notificación.

### NOTIFICACIONES

La suscrita, como apoderada del Distrito Especial de Santiago de Cali, las recibiré en la Secretaría de Infraestructura Municipal ubicada en el CAM, Torre Alcaldía, Piso 12. Correo electrónico [juridica3zona@hotmail.com](mailto:juridica3zona@hotmail.com) celular 3103878621.

Por instrucciones de la Dirección del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, las actuaciones dentro del proceso serán remitidas a través del correo oficial [ejercicio.defensa01@cali.gov.co](mailto:ejercicio.defensa01@cali.gov.co)

De otro lado, el buzón oficial para la recepción de notificaciones del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme lo dispone el art. 197 del CPACA, es [notificaciones.judiciales@cali.gov.co](mailto:notificaciones.judiciales@cali.gov.co)

Las compañías objeto del llamado y su representante legal, las recibirán en las direcciones indicadas en los certificados de existencia y representación expedidos por Cámara y Comercio.

Del Señor Juez Administrativo,

Atentamente,



**LINA MARÍA ARBOLEDA GÓMEZ**

C.C.N° 1130592302 de Cali-Valle

T.P. N° 191823 del C.S de la Judicatura